

JDO. CENTRAL DE LO PENAL N. 1

MADRID

SENTENCIA: 00053/2013

AUDIENCIA NACIONAL

JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL

PA143

MAGISTRADO:

D. JOSE MARIA VAZQUEZ HONRUBIA

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, en la causa **Procedimiento Abreviado nº 11/2012**, ha dictado,

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD, EL REY,

La siguiente

SENTENCIA Nº 53/2013.-

En MADRID, a nueve de Diciembre de dos mil trece.

VISTO en Juicio Oral y Público, ante el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, el procedimiento arriba referenciado, procedente de Juzgado Central de Instrucción nº 006 (DPA 317/09), seguido por un **delito contra la Hacienda Pública**, referido al ejercicio fiscal del año 2002, **contra Antonio Mata Ramayo**, n/ Polanco (Cantabria) el 14/10/1953, h/ Celedonio y María, con D.N.I. nº 50.668.141-S y **Gerardo Díaz Ferrán**, n/ 27/12/1942, h/ Gerardo y Agustina, con D.N.I. nº 2.804.858-P; habiendo sido partes el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado y dichos acusados.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.— El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, calificó los hechos procesales como constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública, previsto y penado en el artículo 305 del C.P., referido al ejercicio fiscal del año 2002 y solicitó que se impusiera a cada uno de los acusados las siguientes penas: DOS AÑOS y CUATRO MESES de prisión, multa del tanto de la cantidad defraudada con responsabilidad subsidiaria en caso de impago por tiempo de 6 meses, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cinco años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, durante el tiempo de la condena, con accesorias legales y costas.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, solicitó que se asignara a los acusados una indemnización conjunta y solidaria a la Hacienda Pública en la cantidad de 99.049.520,50 euros, importe que se incrementará en todos los casos con la cuantía que proceda en concepto de intereses de demora del artículo 58 de la L.G.T., sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576 de la L.E.C.

SEGUNDO.— El Abogado del Estado, en sus conclusiones provisionales, calificó los hechos procesales como constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública, previsto y penado en el artículo 305 CP, en relación con el Impuesto sobre sociedades, ejercicio cerrado a 28/02/2002, solicitando que se impusiera a cada uno de los acusados la pena de DOS AÑOS y CUATRO MESES DE PRISIÓN, multa del tanto de la cantidad defraudada, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago por tiempo de 6 meses, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social

durante un periodo de cinco años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además solicitó que los acusados indemnizaran, conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública, en la cantidad de 99.049.520,50 euros, importe que se incrementará en todos los casos en la cuantía que proceda en concepto de intereses de demora del artículo 58 de la L.G.T., sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576 de la L.E.C. vigente; correspondiendo condenarles expresamente a satisfacer las costas causadas a la acusación particular, estableciendo como responsables civiles de dicho importe a las mercantiles AIR COMET S.A., TRANSPORTES DE CERCANIAS S.A., AUTOBUSES URBANOS DEL SUR S.A. (BUSURSA) Y SEGETUR.

TERCERO.- Celebradas las sesiones del Juicio Oral los días 27, 28, 29 de noviembre y 2 de diciembre del presente año, en los términos que constan en las grabaciones efectuadas al efecto.

HECHOS PROBADOS

En el año 2001, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) era propietaria del 99,2% de las acciones de INTERINVEST S.A., entidad mercantil domiciliada en Argentina y sujeta al derecho argentino; propietaria, a su vez, del 92,10% del capital de AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. (ARSA) y del 90% de AUSTRAL.

ARSA era la compañía aérea de bandera argentina participada por su gobierno en un 5% y por los trabajadores, a través del programa de propiedad participada, en un 2,90%.

AUSTRAL era la compañía que operaba en el mercado doméstico argentino, participada, además de por INTERINVEST, por sus trabajadores en un 10%.

Ambas compañías tenían como actividad principal el transporte de pasaje y carga dentro y fuera de Argentina.

INTERINVEST, por su parte, fue creada en el año 1994 por IBERIA LAE, creación ligada al proceso de inversión en Argentina que inició IBERIA en 1990. En 1995, IBERIA procedió a separar sus riesgos en empresas aéreas latinoamericanas, condición impuesta por la Unión Europea, para poder ser beneficiaria de determinadas ayudas; desinversión que se realizó mediante la venta de la mayor parte de la participación que IBERIA poseía a través de INTERINVEST en ARSA a ANDES HOLDING BV, compañía de derecho holandés participada en un 42% por SEPI (entonces TENEO).

En el año 2000, ante las continuas pérdidas que venía sufriendo ARSA, se realizó un Plan Director que debía permitir a la Compañía ser un Grupo Aéreo, líder en el mercado doméstico argentino, llegándose a firmar un acuerdo entre SEPI y el gobierno argentino.

En noviembre de 2000, SEPI compra INTERINVEST a ANDES HOLDING BV, de acuerdo con la decisión del Consejo de Administración de 31 de octubre de 2000 y autorización del Consejo de Ministros de 7 de noviembre de 2000.

La situación de ARSA se agravó hasta el punto de que el 21 de junio de 2001 se aprobó la suspensión de pagos de la Compañía, ratificándose en Junta de Accionistas de fecha 17/08/2001.

Por medio de contrato de compraventa fechado el 2/10/2001 y elevado a escritura pública en fecha 15/10/2001, SEPI vendió sus acciones en INTERINVEST a AIR COMET S.A. por el precio de un dólar USA. Dicho contrato fue firmado, por un lado, por D. Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer, en nombre y representación de SEPI, y por otro, Antonio Mata Ramayo, Gerardo Díaz Herranz y Gonzalo Pascual Arias, cuya responsabilidad criminal ha quedado extinguida por fallecimiento. El primero de ellos en nombre y

representación de AIR COMET S.A. en cuanto consejero delegado de dicha mercantil; el segundo, en nombre y representación de TRANSPORTES DE CERCANÍAS; Gonzalo Pascual Arias, en nombre y representación de AUTOBUSES URBANOS DEL SUR (BUSURSA); y Antonio Mata Ramayo, también en nombre y representación de SEGETUR, siendo todas estas mercantiles (TRANSPORTES DE CERCANIAS, BUSURSA y SEGETUR) accionistas de AIR COMET.

En la estipulación novena del contrato, el vendedor SEPI asumía a su cargo los pasivos exigibles hasta un importe máximo de 300 millones de dólares USA, comprometiéndose a aportar en INTERINVEST los 300 millones que debía destinar AIR COMET al pago de una lista de pasivos que aparecían en un anexo del contrato.

El contrato de compraventa, elevado a público el 15/10/2001 y autorizado por el Consejo de Ministros, establecía lo siguiente: *"el vendedor asume a su cargo pasivos exigibles que resultan de la información contenida en el DOCUMENTO BASE y en la INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA de cada una de las SOCIEDADES hasta un importe máximo de 300 millones de dólares USA"* (estipulación novena, primer párrafo). Queda ese compromiso más detallado al determinar que *"el vendedor (SEPI) aportará a la COMPAÑÍA (INTERINVEST) la cantidad de 300.000.000 USD en la FORMALIZACIÓN. Dicha cantidad quedará ingresada en una cuenta bloqueada a nombre de la COMPAÑÍA y se destinará por el COMPRADOR (AIR COMET) al pago de una lista de pasivos de las SOCIEDADES (ARSA Y AUSTRAL) o de la COMPAÑÍA que se acompañará como anexo a la escritura de FORMALIZACIÓN. La cantidad a liberar para cada uno de los pagos será la que se presente como definitiva para cada acreedor por el COMPRADOR"*. En cumplimiento de estos acuerdos, el día 15/10/2001 se abrió la cuenta bloqueada nº 0182 3999 36 2012175035 en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, a nombre de INTERINVEST, realizando SEPI un ingreso de 300.000.000 dólares USA.

En el Convenio de Aportes Irrevocables suscrito en Madrid con fecha 15/10/2001, se refleja la intención de la Sociedad INTERINVEST de proceder a la adquisición de los créditos contra la propia sociedad ARSA y AUSTRAL, detallados en anexo al propio convenio. A estos efectos se entregaron por el aportante SEPI *"la cantidad de*

300.000.000 dólares USA en concepto de aporte irrevocable de capital a cuenta de futura suscripción de acciones". Este Convenio solo imponía, como límite temporal, que la efectividad íntegra del aporte -mediante la constitución de una cuenta bloqueada bajo firma conjunta de representación tanto de SEPI como de INTERINVEST para las sucesivas disposiciones- tuviera lugar antes del 31 de diciembre de 2003.

En el acuerdo privado entre AIR COMET y sus accionistas de fecha 3/12/2001, elevado a público mediante escritura de la misma fecha, se preveía que AIR COMET S.A. se obligaría, irrevocablemente, a que los créditos adquiridos solo pudieran ser utilizados como fondos propios para ampliar capital o realizar aportes irrevocables a ARSA, obligación ésta a cumplir en el plazo de seis meses desde la aprobación del Acuerdo de Acreedores del Concurso Preventivo de ARSA; y que en caso de que los créditos fueran utilizados de forma distinta, se conferiría a SEPI el derecho a exigir de cualquiera de los firmantes el reembolso de las cantidades destinadas a otra finalidad.

De conformidad con lo estipulado en el Convenio de Aportes irrevocables y en el Acuerdo de 3/12/2001, suscrito por AIR COMET, sus accionistas y VIAJES MARSANS, fueron satisfechos créditos de ARSA por importe de 272.872.584,20 dólares USA, créditos que quedaron cedidos a AIR COMET, con el compromiso de ésta de aportarlos posteriormente al capital social de ARSA en forma d aportes irrevocables.

Al mantenerse vigentes los créditos cedidos a AIR COMET, ésta adquiría un beneficio que resultaba de haber adquirido tales créditos con fondos procedentes de SEPI a título gratuito, beneficio que tendría las siguientes consecuencias fiscales:

<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->En los ejercicios cerrados a 28/02/2002 y a 28/02/2003, AIR COMET había adquirido, con carácter lucrativo, derechos de créditos por importe de 246.256.461,20 dólares USA y 26.616.122,00 dólares USA, respectivamente. En consecuencia, en el ejercicio cerrado a 28/02/2002, AIR COMET tendría que haber ingresado, por Impuesto Sobre Sociedades, una cuota de 99.049.520,50 euros.

<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Tras la resolución del concurso de ARSA el 26/12/2002, los créditos adquiridos por AIR COMET habrían sufrido una quita del 60%, acordada en la resolución del citado concurso, quedando valorados en 109.149.033,68 dólares USA. Como consecuencia de estas pérdidas, en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades de AIR COMET del ejercicio cerrado a 28/02/2003 resultaría una base imponible comprobada de -175.078.541,61 euros, con una cuota a devolver de -40.444,44 euros, generándose una base imponible negativa a compensar en los ejercicios siguientes de 175.078.541,61 euros. En definitiva, Air Comet además de no contrabilizar los créditos adquiridos en el momento exigible, es decir, antes del 28/02/2002, como acreedor controlador del concurso de ARSA procuró una quita del 60% produciéndose la correspondiente minusvalía con las correspondientes consecuencias fiscales en el ejercicio cerrado a 28/02/2003.

El proceso de privatización de ARSA ha sido fiscalizado por parte del Tribunal de Cuentas y la materialización de las estipulaciones de la venta a través del Convenio de Aportes Irrevocables de fecha 15 de octubre de 2001, ha sido considerado correcto, habiendo emitido sobre dicha privatización los siguientes informes:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Informe nº 705 de Fiscalización del Tribunal de Cuentas de 16/03/2006, de las operaciones realizadas por el Sector Público Estatal en relación con ARSA.

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Informe nº 765 de Fiscalización de la situación a 31/12/2006, de los compromisos establecidos en el contrato de compraventa de INTERINVEST suscrito entre SEPI y AIR COMET S.A., aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas de 19/07/2007.

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->Informe de Fiscalización de la situación a 30/10/2008 del Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, en el Tribunal de Cuentas se han incoado:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->Actuaciones Previas nº 133/07, con Acta de liquidación provisional de fecha 13/05/2008 y auto de archivo de 28/07/2008.

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Actuaciones Previas nº 62/2009, con Acta de liquidación provisional de fecha 16/12/2009 y auto de archivo de 25/02/2010.

Asimismo, ha sido fiscalizado por la Intervención General del Estado, que emitió el Informe de Auditoria sobre la operación de privatización de INTERINVEST, Plan de Auditoria 2003, del IGAE.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública previsto y penado en el artículo 305 del Código Penal, afectante al Impuesto de Sociedades del ejercicio fiscal del año 2001 del que deben responder los acusados Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata Ramayo por la participación directa material y voluntaria que tuvieron en su ejecución.

En puridad, a pesar de la intrínseca complejidad y volumen de la causa, los términos del debate se han centrado en dilucidar si como sostienen los acusados, la Sociedad obtuvo en el ejercicio de Autos un incremento del activo sujeto al Impuesto de Sociedades debido a la adquisición de créditos contra Aerolíneas Argentinas (ARSA) contra determinados terceros, así ABN AMOR BANK, BBVA, CITIBANK, REPSOL, INDRA y otros, créditos que se adquirieron con fondos librados por la SEPI, que había vendido INTERINVEST, que a su vez era dueña de ARSA al detentar el 99,2% de las acciones de dicha compañía, venta por la que adquirió æIR PLUS» a la SEPI la aerolínea ARSA por el precio de 1 dólar, obligándose el vendedor (SEPI) a entregar la suma de 300 millones de dólares-USA a la parte compradora para el pago de pasivo, determinadas deudas, de ARSA. Este capital, cedido por la SEPI o con la forma de fue entregado a INTERINVEST S.A., la cual se los cedió a æIR COMET a modo de préstamo o

cesión no gratuita es decir, con la obligación de restituir su importe a la cedente o prestamista de tal modo que el ingreso fiscal sería 0, en cuanto el ingreso para Air Comet sería equivalente a la deuda contraída con INTERINVEST.

Las acusaciones, por el contrario, mantienen que los fondos provenientes de la SEPI no se convierten en préstamo alguno a AIR PLUS en cuanto esta sociedad no paga los créditos, sino que los adquiere a los acreedores: Repsol, BBVA, etc. De tal modo que esta sociedad obtiene un beneficio, sujeto a gravamen, y que no declara en el ejercicio fiscal de 2001. Y resulta mas conforme a derecho la tesis de las acusaciones por las consideraciones que se exponen.

Sin embargo, aunque ya se ha detallado en los hechos probados, los antecedentes de la cuestión hay que buscarlos en el contrato privado de compraventa suscrito el 2/10/2001, elevado a escritura pública el 15/10/2001, en el que la SEPI, por el precio de 1 dólar USA, vendía INTERINVEST a los acusados Antonio Mata Ramayo (AIR COMET) y Gerardo Díaz Ferrán (TRANSPORTES DE CERCANÍAS) y al fallecido Gonzalo Pascual (BUSURSA), representando Mata Ramayo también a SEGETUR, siendo las sociedades citadas accionistas de «AIR COMET» INTERINVEST era la propietaria de ARSA y como esta compañía, en situación de quiebra técnica y declarada en suspensión de pagos desde junio del mismo año, acumulaba un notable pasivo, la propia vendedora, para tratar de reflotar dicha compañía, asumía los pasivos (deudas) de ARSA hasta un máximo de 300 millones de dólares USA que AIR COMET debía destinar al pago de determinadas deudas. Así lo establece la cláusula 9ª (ver folio 145 TOMO II) que literalmente dice que los 300 millones de euros se destinarían al pago de los pasivos de las Sociedades (ARSA). En suma, la SEPI vende una Cía saneada, pues la propia vendedora se hace cargo de las deudas de la compañía que vende. Además la SEPI asume a su cargo compromisos económicos resultantes de la ejecución o implementación de un Plan Industrial aportando hasta un máximo de 248.000.000 dólares.

Pero, sin embargo, en virtud del Convenio de «Aportes Irrevocables» de fecha 15 de octubre de 2.001 suscrito entre INTERINVEST (que había sido adquirida por AIR COMET) y la SEPI, donde decía (contrato privado) que los 300 millones

serían destinados, literalmente, al pago de deudas, en definitiva de ARSA, se establece que esos fondos son requeridos al aportante para adquirir los créditos antes indicados. Esta mutación entre extinguir deudas y comprarlas tiene capital importancia.

Así los acusados (AIR COMET) en documento elevado a escritura pública con fecha 3 de diciembre de 2.001 (folios 335 y siguientes del Tomo II), en su condición de accionistas de INTERINVEST, se obligan a adquirir los créditos (los que ya constaban en el contrato de 2 de octubre), los cuales una vez adquiridos solo podrán ser utilizados como fondos propios para ampliar capital o realizar aportes irrevocables a ARSA. Esta compra de créditos se participa a la SEPI que deberá ser certificada de que el destino de los 300 millones es para adquirir créditos de ARSA, no para pagarlos. En la cláusula 5ª de este documento, los acusados se comprometen a que "las consecuencias fiscales, cualesquiera que estas sean" no serán reclamadas a la SEPI.

A mayor abundamiento obra al folio 170, TOMO II, una carta reconocida en juicio en que AIR COMET "participa a la SEPI que ha adquirido de sus titulares los créditos, las deudas de ARSA.

El acusado Mata Ramayo ha alegado en juicio que los fondos cedidos por la SEPI a INTERINVEST y a su vez traspasados por ésta a AIR COMET para comprar los créditos, era un puro contrato de mandato, o bien que INTERINVEST le adelanta a AIR COMET los créditos, era un simple préstamo.

Ha quedado acreditado que para ir pagando con el dinero cedido por la SEPI se abrió una cuenta bloqueada y mancomunada en que se necesitaban dos firmas para hacer el pago, una de INTERINVEST y otra de un funcionario de la SEPI. Pero Mata Ramayo, Presidente de AIR COMET, es también representante de INTERINVEST, por lo que ya se puede adelantar que todas las alegaciones formuladas relativas a la absoluta independencia de ambas sociedades, dotadas de personalidad jurídica propia, no se sostienen, como mantiene el Ministerio Fiscal. INTERINVEST no es más que

una sociedad patrimonial, instrumental, de AIR COMET y le hace de Sociedad pantalla.

En resumen, con el dinero que la SEPI entrega a INTERINVEST se lucra AIR COMET, que adquiere de sus titulares una serie de deudas con un capital que se entrega con la finalidad de saldarlas. Como estos créditos cedidos por INTERINVEST a AIR COMET (conforme obra en actuaciones e informa el Perito de acusados Sr. Garrido Riosalido) son cedidos nuevamente por AIR COMET a INTERINVEST ln pago de la deuda, contraída por AIR COMET, que los habría recibido de ésta, y es INTERINVEST quien acude a la ampliación de capital de ARSA como detentador de dichos créditos, a la postre se convierten en capital para INTERINVEST. Y el círculo se cierra, INTERINVEST obtiene el consiguiente beneficio por la adquisición de acciones de ARSA, pero al ser sociedad argentina no tributa en España y AIR COMET, que se quiere presentar como un mero mandatario poco más que recadero, tampoco tributaria pues los fondos que maneja son de un tercero y por tanto al dar cuanto recibe, sin obtener nada, su resultado será fiscalmente neutro.

Pero la realidad fue que los millones de dólares aportados por la SEPI para cancelar pasivos de INTERINVEST fueron utilizados por AIR COMET para la compra de esos pasivos quedando subrogada en la posición de Acreedor frente a ARSA interviniendo en el concurso de acreedores de dicha sociedad (Informe Tribunal de Cuentas). Es decir AIR COMET se coloca en la situación de los antiguos acreedores de Aerolíneas (Repsol, BBVA, etc.) con dinero procedente que el SEPI había cedido a INTERINVEST, Sociedad que había sido adquirida por AIR COMET, por ello INTERINVEST es una mera instrumental, una pantalla de ésta última.

Por este mecanismo AIR COMET se convierte en la principal acreedora de ARSA en el procedimiento concursal de Argentina. Los titulares primigenios de los créditos los cobran sin que se extingan y AIR COMET impone una quita del 60% y obtiene así el 40% de sus importes. Y no incluye en su contabilidad de 2001 los créditos (activo) que adquiere y al forzar la quita del 60% los incluye como perdidas en el ejercicio de 2002.

Así resulta evidente que Air Comet era única titular de los créditos adquiridos con cargo a los 300 millones de dólares entregados por la SEPI.

Conforme al acuerdo de fecha 3 de diciembre de 2.001, suscrito por AIR COMET y sus accionistas (Transporte de Cercanías, Busursa, Segetur y Viajes Marsans) se comprometía a adquirir determinados créditos de los que ARSA era deudora, quedando AIR COMET subrogada en todos ellos, llegándose a utilizar los créditos adquiridos para ampliar capital de ARSA, por tanto AIR COMET acaba ampliando su participación en ARSA a costa de los fondos aportados por la SEPI en INTERINVEST, que tenían como finalidad pagar los pasivos de ARSA.

SEGUNDO.- Y si se hacen estas consideraciones es para entender como se hace, exacto, correcto y ajustado a derecho el informe pericial del Sr. Navas Díaz, funcionario de Hacienda. Las partes acusadas sin utilizar el mecanismo de la recusación (arts. 468 y siguientes de la L.E.Cr.) han pretendido desvirtuar las conclusiones del mismo alegando mas o menos implícitamente que tendría interés en la causa por su condición de funcionario de Hacienda. Y sobre este punto baste decir que el Tribunal Supremo ha sancionado la plena validez de los testimonios e informes que se produzcan en un juicio por delito contra la Hacienda pública vertidos y presentados por Inspectores de Hacienda, pues la doctrina general viene establecida por la STS 6/11/2000 Y 8/5/2001 que declaran que la imparcialidad de los peritos judiciales informantes viene determinada por su condición de funcionarios públicos cuya actuación debe estar dirigida a servir con objetividad los intereses generales. Todo ello sin perjuicio de que el dictamen se someta al procedente debate contradictorio y a la debida valoración judicial conforme a la sana crítica. En el mismo sentido la STS 520/2008 de 19 de julio y 891/2009 de 18 de septiembre que establecen que la condición de Inspector Tributario no genera interés personal que los inhabilite ni determina perdidas de imparcialidad. La STC 147 de 19 de junio establece que tales informes tienen plena validez como prueba de cargo, declarándolos suficientes para enervar la presunción de inocencia.

También han alegado las defensas la condición de Subinspector del Perito, negándole por lo que se dice capacidad profesional para el desempeño de su cargo. Pero el Sr. Navas ha sido designado para el caso por la propia Administración Tributaria y forma parte del equipo de auxilio judicial contra delitos fiscales. Carece de sentido que las defensas aleguen interés en la causa del Perito designado por Hacienda para auxiliar a los tribunales y que

el propio organismo que, como dice el Tribunal Supremo, defiende intereses generales designe a una persona sin cualificación suficiente.

Y el fundamento de su conclusión y, por tanto, de la comisión del delito fiscal hay que buscarlo conforme su informe en que AIR COMET adquiere créditos sin tener fondos para ello. Estos ingresos no están contabilizados en el balance del año 2.001. En su activo no refleja créditos adquiridos. Todo se adquiere en Diciembre de 2.001 (que se refleje posteriormente) es indiferente para el balance de 2.001. La realidad es que AIR COMET es titular de esos créditos en el concurso de ARSA y los utiliza para manejar el concurso. El propio perito alega que resulta poco menos que imposible determinar cuando se contabilizan esos créditos pues hay absolutas divergencias entre la documentación presentada ante la Hacienda Pública y el Registro Mercantil. Lo esencial es que en el ejercicio de 2.001 realiza pagos para adquirir derechos no para liquidarlos por tanto esos créditos adquiridos se incorporan a su activo y AIR COMET contabiliza estos créditos cuando ya se ha cerrado el ejercicio de 2.001 (ultimo día 28 de febrero de 2.002) y se contabilizan el 1 de marzo de 2002, es decir, al día siguiente -fuera de plazo-. El Perito concluye que al ser AIR COMET titular de todas las acciones de INTERINVEST, ésta es una sociedad puramente patrimonial interpuesta. En realidad por tanto AIR COMET compra los créditos, es decir activo sin tener medios para ello, el capital se lo proporciona INTERINVEST, esta sería una pura cesión gratuita, una donación o si se quiere, un enriquecimiento sin causa como no sea la pura liberalidad del donante, pero en definitiva el beneficio es para AIR COMET el incremento de valor es para esta Cía y esto es el hecho imposible que se quiere ocultar.

Air Comet no declara este ingreso ni como préstamo ni como deposito, en el contrato de 2/10/2001 no se menciona Air Comet.

Pero el 3/12/2001 se protocoliza un acuerdo entre Air Comet, sus accionistas y Viajes Marsans, en que se establece que Air Comet tiene intención de adquirir de sus titulares varios créditos (los repetidos de la lista de pasivos- y se obliga a utilizarlos como fondos propios para ampliar capital de Aerolíneas. La clave es que Air Comet es

accionista de Interinvest, que a su vez es accionista de control de Aerolíneas.

La operación consiste en que Air Comet se constituye en acreedor dominante en el concurso de Aerolíneas (Arsa) pues para ésta solo habría cambiado de acreedores pero cuando obtenga los reembolsos del concurso y los ceda a su patrimonial Interinvest, esta obtendrá el correspondiente incremento patrimonial. Pero como Interinvest es empresa argentina no tributa en España y como Air Comet no hizo constar en su balance el incremento de su activo en el ejercicio de 2.001, es decir aquel en que había adquirido los derechos de Interinvest, tampoco pretende tributar en España.

En definitiva como asevera el Perito, los créditos por un importe total de 272.872.584 dólares USA fueron satisfechos a los acreedores mediante cheques bancarios emitidos por el BBVA a nombre de Interinvest con los fondos del SEPI, y a su vez esta Sociedad los cedió a Air Comet, con la peculiaridad fuera de toda lógica mercantil que el adquirente no obtuvo descuento alguno.

Los créditos no quedan liquidados, entonces no hubieran experimentado ningún beneficio, que es la tesis mantenida por los acusados en el juicio oral, Air Comet era un mero mandatario pero al subsistir dichos créditos Air Comet adquirió con ellos el beneficio derivado de su inclusión como nuevo acreedor en el concurso de ARSA. Y concluido el mismo, el beneficio se materializa ya en el cobro en metálico de los créditos cedidos (aunque obtenga una quita del 60%) ya en la adquisición por importe equivalente de una participación social en el capital de ARSA en futuras emisiones de acciones. Y al final quien acude a la ampliación de capital es Interinvest, pues Air Comet le cede los créditos adquiridos para pagar la deuda por la anterior cesión. Pero en suma, la conclusión que se extrae es la misma: Air Comet adquiere los créditos no con fondos propios, sino con los fondos de la SEPI ingresados en una cuenta de su participada, es decir INTERINVEST. Mediante estos fondos se constituye como acreedora mayoritaria y con posición dominante en el concurso de ARSA y concluido el mismo los cede a su patrimonial INTERINVEST que los capitaliza como acciones de ARSA.

Así que no es de recibo que Air Comet pretenda estar exenta del pago de impuestos por no obtener beneficio alguno cuando el beneficio final, con los fondos del SEPI, lo obtiene su patrimonial Interinvest que no paga impuestos en España.

Ya se ha dicho que este incremento en el activo de Air Comet se produce en el 2001 y no se refleja en el balance del ejercicio cerrado en 28/02/2002. Las defensas has alegado que no se podía incluir en el balance hasta el 5 de marzo de 2002 fecha en la que el Juzgado de lo Mercantil de Buenos Aires incluyó estos créditos en el concurso de acreedores lo cual se desmonta por la propia contabilidad de Air Comet que los incluyó el 1 de marzo de 2002, es decir, al siguiente día del cierre. Este punto es ratificado en la vista por el Sr. Martinez Llerandi, Director financiero de Air Comet en el tiempo de los hechos. Al demorarse hasta el día siguiente la contabilización de los créditos adquiridos, la contabilidad, por tanto (pese a estar auditada) no refleja la imagen fiel de la compañía.

Mucho se ha debatido en la vista sobre la naturaleza del contrato entre Interinvest y Air Comet hablándose de que ésta sería una mera mandataria de aquella lo cual como se ha visto no es admisible pues no extingue los créditos si no que los adquiere con las finalidades consideradas y también se ha aludido que Air Comet era una mera depositaria de los fondos. Y el perito de Hacienda preguntado y repreguntado con plena convicción y firmeza ha hecho hincapié en el epígrafe "derechos no comerciales" del Pasivo del balance de situación del ejercicio cerrado a 28/02/2002, donde en la partida Fianzas y Depósitos recibidos a corto plazo por importe de 8.816.819 euros existe un apunte no consignado en el balance del ejercicio anterior.

Pero en la nota 15 de la Memoria del ejercicio en relación con esa cuenta el importe de 7.625.667 dólares USA dice representar el saldo pendiente de utilizar correspondientes a los depósitos recibidos destinados a la compra de pasivos de ARSA y para realizar pagos por la operativa corriente de la citada sociedad, no presentándose

ni una sola justificación documental de pagos por dicha operativa.

Concluye acertadamente el Perito según se considera, que como no se hace constar de quien se habrían recibido estos depósitos no hay otra conclusión que procedían de Interinvest que era quien pagaba los créditos, para adquirirlos, a los anteriores acreedores (ver folios 454 y siguientes del Tomo V).

Y en el balance de situación de Air Comet no figuran en su activo los derechos de cobro adquiridos ni aparece en su pasivo endeudamiento correspondiente (sería deudora de Interinvest) y ello a pesar de que Air Comet quedaba subrogada en los créditos con la que se presentaría en el concurso de ARSA. Que a la postre beneficiaría a Interinvest que es quien cede a Air Comet los créditos a título puramente lucrativo o gratuito. En la memoria de Air Comet (año 2001) no se menciona ni a Interinvest ni la supuesta deuda contraída por Air Comet. Se habla de depósitos y ello no es un préstamo.

La defensa de Díaz Ferrán ha argumentado que relación entre Air Comet e Interinvest al cederle los créditos no es ni préstamo ni depósito si no una relación compleja que no aclara ni especifica.

En suma, este punto 15 de la memoria acredita como Air Comet recibe activos de su patrimonial y no los contabiliza en su balance, sin justificar ni su procedencia ni su destino.

Curiosamente como el Perito de parte Sr. Garrido Riosalido, después de atribuir la no inclusión de los créditos a error contable, argumenta que no tienen trascendencia tributaria los activos no contabilizados en la base imponible si se descuentan los créditos no contabilizados para su adquisición.

También argumenta la defensa que si se aprovisiona la donación por apunte contable (de valor declarativo y no constitutivo) tampoco habría trascendencia tributaria.

Y estas alegaciones se consideran que refuerzan la conclusión culpabilizadora, pues en todo caso no tiene explicación que se ocultara en el balance de Air Comet el enriquecimiento procedente de los fondos cedidos por Interinvest salvo, naturalmente, que se quisiera ocultar al Fisco el alcance de la operación que no es otro que ninguna de las compañías tributase en España.

Alguna defensa ha aludido a la doctrina del levantamiento del velo, aduciendo que Air Comet e Interinvest son sociedades independientes con personalidad jurídica propia pero entre muchas otras recordar la STS 979/2011: Así ~as sociedades constituyen un entramado empresarial controlado por una única persona (en el caso los acusados y sus sociedades) no existiendo una independencia patrimonial en la actividad económica que permita aceptar que operan con autonomía. Las respectivas personalidades no pasan de constituir una apariencia formal; realmente solo existe una única plataforma económica que al utilizarse en fraude o con perjuicio de tercero no puede gozar de la protección que el ordenamiento jurídico otorga a la personalidad individual<

A mayor abundamiento art. 16 ley 43/95 reguladora del impuesto de Sociedades, cuando establece que se considera personas o entidades vinculadas (letras a hasta la m); y solo a título de ejemplo: dos sociedades cuando una de ellas ejerce el poder de decisión sobre la otra.

Por ello, nulo valor defensivo pueden darse a las cuentas de una Interinvest que es adquirida por Air Comet que a su vez adquiere unos créditos con dinero tan ajeno como el de la SEPI para al final volvérselos a ceder a Interinvest con el consiguiente beneficio pues siempre son los acusados y sus sociedades quien dirigen a los intervinientes en el entramado. Diaz Ferran y Mata Ramayo y sus sociedades son quienes compran Interinvest y son los dueños de Air Comet. Toda esta técnica se apoya en los artículos 6 y 7 del Código Civil es decir el fraude a la

Ley, el abuso del derecho y el ejercicio antisocial del mismo, que se consideran absolutamente aplicables al caso.

El perito de Hacienda ha concluido (ver folio 458) que los tan repetidos créditos, cedidos por sus importes nominales en dólares USA a Air Comet (de ABN AMRO BANK /REPSOL e INDRA) adquiridos por Air Comet gratuitamente ascienden a un total de 275.957.799 euros.

Estos importes deberían haberse anotado contablemente como "derechos de cobro" siendo su contrapartida "ingresos diferidos por donaciones". Estableciendo la norma fiscal que la imputación temporal de la renta debe integrarse en el ejercicio que se produce la adquisición conforme al art. 15.3.3º y 4º el 19.8 de la Ley 43/1995. Y liquidado el correspondiente Impuesto sobre Sociedades de Air Comet del ejercicio 1/3/2001 al 28/02/2002 con las correcciones correspondientes al no incluir en su balance los créditos adquiridos en la forma ya expuesta resulta una cuota a ingresar de 99.049.520 euros. Y tal como establece el art. 305 esta omisión de asientos contables en el ejercicio de 2001 es lo realizado, pues en definitiva AIR COMET no incluye en su declaración los apuntes contables antes citados de los créditos adquiridos, minorando por tanto la "base imponible" su base imponible lo cual encaja en el art. 305 que se aplica: 1º que por acción u omisión defraudarse a la Hacienda Pública Estatal eludiendo el pago de Tributos.

La STS de 28 de octubre de 1.997 (caso Filesa) es muy aclaratoria: El texto legal (art. 305 Código Penal) establece como forma de eludir el pago de tributos "la acción de no pagar" lo cierto es que la defraudación fiscal consiste en no pagar los tributos a los que se está obligado y que la infracción es también un delito de omisión.

En el caso del delito fiscal la omisión o el deber cuya infracción da lugar a la tipicidad, es decir la defraudación, es el de no cumplir con las prestaciones patrimoniales de carácter público. Estando ante el típico caso de Ley Penal en blanco ya que la conducta delictiva consiste en la infracción de una norma tributaria no recogida en el Código Penal, hay que acudir a la Ley Fiscal

en la que se establece el tributo con todas sus consecuencias. (En el caso impuesto de sociedades y su Ley reguladora).

El delito es pues un delito especial propio de naturaleza patrimonial y además de resultado, el bien jurídico es el patrimonio de la Hacienda Pública (STS 5/12/2002). En el caso la elusión del pago de tributos, que aquí interesa, se configura, como se ha dicho, en infracción del deber de contribuir a los gastos públicos.

TERCERO.- Sentado lo anterior y acreditada la acción típica subsumible en el art. 305 del Código Penal las defensas han reclamado que se especifique cual sea el dolo, la voluntad maliciosa de los acusados de defraudar a Hacienda. Pero esta cuestión viene resuelta por el art. 31 del Código Penal: el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica (<.) responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura del delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre<

Lo que persigue este artículo (STS 20/07/93 con cita STS 150/89) es bviar la impunidad en que quedarían las actuaciones delictivas perpetrados bajo el manto de una persona jurídica por miembros de la misma perfectamente individualizables cuando por tratarse de un delito especial propio, es decir delito cuya autoría exige ciertas características, éstas únicamente concurren en la persona jurídica y no en sus miembros integrantes. En suma la responsabilidad criminal se traslada a los órganos directivos o representantes legales de la persona jurídica. Es decir, este delito es cometido por el ente social a través de sus órganos.

Ya la STS, citada 1/1997, señala que cuando el sujeto de una relación tributaria fuere una persona jurídica la responsabilidad penal ha de polarizarse en personas individuales concretamente en los directores, gerentes o

delegados, disponiendo contundentemente el art. 31 del Código Penal, hoy vigente, el administrador de hecho o derecho. Y ya la STS de 2 de mayo de 2008 hacia recaer la responsabilidad en quienes ostenten funciones ejecutivas y a la vez tengan concedidas amplias facultades respecto de la disponibilidad de medios económicos y administración de la entidad.

La tan repetida STS 1/1997 recuerda que ~a responsabilidad del delito Fiscal hay que atribuirle a las personas que como socios o administradores de las empresas ostentaban poder de decisión dentro de las mismas porque tenían o tienen conocimiento de las defraudaciones que se van a realizar. En suma se aplica el principio o teoría del dominio del hecho o de la acción. Los acusados eran como dueños del negocio, quienes lo controlaban y dirigían; y conforme a lo expuesto, su concurso fue imprescindible para ir realizando diversos actos que culminarían en la defraudación tributaria.

Para no hacer excesivamente prolija esta resolución y evitar reiteraciones recordar que el contrato de 2 octubre de 2.001, en el que se compran las acciones de Interinvest (ARSA) es suscrito por Antonio Mata Ramayo en nombre y representación de Air Comet y Gerardo Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías, Mata Ramayo además en condición de accionista de Air Comet a través de Segetur (el fallecido Gonzalo Pascual en nombre de Viajes Marsans) también como accionista de Air Comet. Antonio Mata Ramayo ya declara en instrucción que es Presidente de Air Comet desde su fundación y Consejero Delegado, en cuanto Gerardo Díaz Ferrán es Consejero de Air Comet desde su fundación. Se da la circunstancia que Mata Ramayo era además miembro del "directorio" de ARSA y Presidente de su comité ejecutivo junto con otras personas. Pues bien Air Comet es la que compra Interinvest (ARSA) y a quien se hacen los aportes irrevocables de los 300 millones de dólares en octubre de 2001 y en fecha 3/12/2001 nuevo contrato en el que aparecen Mata Ramayo y Gerardo Díaz y Transportes de Cercanías y en el que ya no aparece Interinvest, que acredita que quien adquiere los créditos es Air Comet, créditos que se utilizan de la forma narrada en esta resolución y cuya adquisición por Air Comet se oculta dando lugar al delito fiscal por el que se procede.

Resulta evidentísimo que los acusados como socios o administradores de Air Comet (Díaz Ferrán a través de Transportes de Cercanías- ostentaban el poder de decisión dentro de la misma, eran los auténticos dueños del negocio y en terminología del Tribunal Supremo tenían funciones directamente ejecutivas y amplias facultades respecto de la disponibilidad de los medios económicos y administración de la sociedad.

CUARTO.- La defensa de Díaz Ferrán ha alegado de forma procesalmente inadecuada que alternativamente a la absolución se aplique en caso de condena, la atenuante de dilaciones indebidas. Y ha sido inadecuado pues dicha alegación no estaba contenida en sus conclusiones provisionales, modificadas al elevarlas a definitivas (art. 737 LEC) por lo que no ha dado opción a las partes acusadoras a informar sobre dicha atenuante.

No obstante y dada su naturaleza, sí puede examinarse la concurrencia de la atenuante 6ª del art. 21 del Código Penal dilación extraordinaria, indebida, desproporcionada a la complejidad del asunto y puede apreciarse solo en orden a la calificación de indebida, pues el asunto es especialmente complejo, ha intervenido un Juzgado de Instrucción de Madrid, abriéndose la investigación por una diversidad de delitos y no solo por delito fiscal' un Juzgado Central, el Tribunal Supremo dirimiendo cuestión de competencia, diversas comisiones rogatorias a Argentina, etc. En total 13 Tomos mas un anexo documental, tampoco la tardanza en los informes periciales o de calificación se podrían considerar extraordinarios por la evidente complejidad. Ahora bien, consta sin apreciarse causa justificativa jurídicamente relevante que el procedimiento estuvo paralizado 6 años en un Juzgado de instrucción de Madrid. Esta dilación indebida, sin causa, sí puede ser apreciada en los términos solicitados por la defensa.

QUINTO.- En cuanto las sociedades responsables civiles subsidiarias Air Comet, Transporte de Cercanías y Segetur no son atendibles sus alegaciones para eludir esta condición. El art. 120. 4º es plenamente aplicable por su dicción literal: as personas jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio (son también responsables civilmente, en defecto, de los que lo sean criminalmente) por los delitos

que hayan cometido sus representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones y servicios» Evidentemente no se puede aplicar el art. 31 bis (responsabilidad penal de las personas jurídicas) pues ni se pide responsabilidad penal a esas Cías ni podría pedirse por el efecto de irretroactividad penal. Pero el fundamento de la Responsabilidad Civil, responsabilidad cuasi-objetiva, no deriva de que estas sociedades hayan intervenido (en los términos, del examinado art. 31 del Código Penal) cometiendo el delito fiscal como dueños de la acción si no en cuanto en su día obtuvieron o pudieron obtener beneficios, esencialmente económicos, en el desarrollo de los hechos en los que intervinieron por vía de sus representantes o gestores, sí estos hechos han devenido en económicamente perjudiciales por los actos de sus representantes, correlativamente, deben arrostrar los perjuicios. La responsabilidad de estas subsidiarias conforme al art. 116 del Código Penal es solidaria entre sí.

SEXTO. – En orden a la individualización de la pena estimándose la atenuante de dilaciones indebidas conforme al art. 66 1,1ª la pena debe imponerse en su mitad inferior, como la pena aplicable en el momento de los hechos era de 1 a 4 años, esta mitad inferior oscila entre 1 año y 2 años y 6 meses. Dentro de ese marco hay que determinar la naturaleza y gravedad del hecho y en primer lugar es evidente la especial trascendencia y gravedad de la defraudación, 99 millones de euros, considerándose muy especialmente también la procedencia de los fondos con la que se cometió, que no son otros que los del Erario Público, efectivamente el SEPI para deshacerse de una compañía con gravísimos problemas económicos (ARSA) cedió a los acusados 300 millones de euros, sin olvidar que comprometió otros 248 millones de euros para la ejecución o implementación de un Plan Industrial para reflotar la citada ARSA lo cual se considera un plus de reprochabilidad o culpabilidad, pues a pesar del elevadísimo montante de dinero público cedido a los acusados, éstos realizaron las maquinaciones que se han considerado para eludir el pago de los impuestos que les correspondían es decir en terminología del Tribunal Supremo, incumplir prestaciones patrimoniales de carácter público y en consecuencia ni siquiera restituir a los contribuyentes, de quienes procedían los fondos utilizados para defraudar, la cantidad a la que estaban fiscalmente obligados. Por eso se considera la pena de 2 años y de 2 meses de prisión adecuada y proporcionada a los hechos y los culpables.

SEPTIMO. – En orden a las responsabilidades civiles se considera conforme y ajustada a derecho la cantidad fijada por el Perito de Hacienda en cuanto éste ha explicitado su informe, singularmente detallado con especial fiabilidad y firmeza, sin dudas ni contradicciones, así apreciada por intermediación efectiva.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

FALLO

Que **debo condenar y condeno a Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata Ramayo**, como autores criminalmente responsables de un delito contra la Hacienda Pública (defraudación del Impuesto de Sociedades del ejercicio fiscal del año 2001, cerrado el 28/02/2002), con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena, **a cada uno de ellos, de DOS AÑOS Y DOS MESES DE PRISIÓN y MULTA de 99.049.520,50 euros**, con seis meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y **pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social**, durante un periodo de 4 años y 6 meses, así como **inhabilitación especial para el ejercicio el derecho de sufragio pasivo** durante el tiempo de la condena y **pago por mitad de las costas** causadas.

Asimismo, Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata Ramayo, **indemnizarán conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública en la cantidad de 99.049.520,50 euros**, importe que se incrementará en todos los casos en la cuantía que proceda en concepto de intereses de demora del artículo 58 de la L.G.T., sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 576 de la L.E.C.

Se declara expresamente la responsabilidad civil subsidiaria de las sociedades AIR COMET S.A., TRANSPORTES DE CERCANIAS y SEGETUR, que responderán solidariamente entre sí del pago de la citada cantidad de 99.049.520,50 euros.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, a las demás partes procesales y a los perjudicados.

Esta Sentencia no es firme.

Conforme al Artículo 790 LECrim.

1. La sentencia dictada por el Juez Central de lo penal es apelable ante la Audiencia Nacional. El recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia. Durante este período se hallarán las actuaciones en la Oficina judicial a disposición de las partes, las cuales en el plazo de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia podrán solicitar copia de los soportes en los que se hayan grabado las sesiones, con suspensión del plazo para la interposición del recurso. El cómputo del plazo se reanudará una vez hayan sido entregadas las copias solicitadas.

La parte que no hubiera apelado en el plazo señalado podrá adherirse a la apelación en el trámite de alegaciones previsto en el apartado 5, ejercitando las pretensiones y alegando los motivos que a su derecho convengan. En todo caso, este recurso quedará supeditado a que el apelante mantenga el suyo.

Las demás partes podrán impugnar la adhesión, en el plazo de dos días, una vez conferido el traslado previsto en el apartado 6.

2. El escrito de formalización del recurso se presentará ante el órgano que dictó la resolución que se impugne, y en él se expondrán, ordenadamente, las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de normas del ordenamiento jurídico en las que se base la impugnación. El recurrente también habrá de fijar un domicilio para notificaciones en el lugar donde tenga su sede la Audiencia.

Si en el recurso se pidiera la declaración de nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales que causaren la indefensión del recurrente, en términos tales que no pueda ser subsanada en la segunda instancia, se citarán las normas legales o constitucionales que se consideren infringidas y se expresarán las razones de la indefensión. Asimismo, deberá acreditarse haberse pedido la subsanación de la falta o infracción en la primera instancia, salvo en el caso de que se hubieren cometido en momento en el que fuere ya imposible la reclamación.

3. En el mismo escrito de formalización podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba que no pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que hubiere formulado en su momento la oportuna protesta, y de las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean imputables.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

PUBLICACION.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la firma, estando celebrando Audiencia Pública en el mismo día de la fecha, de lo que doy fe.-

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.